La tubería se quedará aunque la cesión de agua sea temporal, afirma el PSOE

Los socialistas no quieren desmontar la obra por si falla la desalinizadora de El Prat El responsable de Aragón se desmarca de sus compañeros hasta que no haya informe

AGENCIAS

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró ayer que la cesión del agua desde el Ebro a Barcelona a través de una tubería es una solución temporal a partir de octubre y hasta junio del 2009, cuando entre en funcionamiento la desalinizadora de El Prat. Sin embargo, defendió el carácter permanente del minitrasvase de Tarragona hasta Barcelona ante un eventual fallo de la futura desalinizadora de El Prat, que entrará en funcionamiento previsiblemente a mitad del próximo año.

REPRESENTACIÓN. Pajín y Serna, a los extremos, en la reunión convocada ayer en el PSOE. / EFE

La responsable socialista de Medio Ambiente calificó de «urgente y excepcional» la situación de Barcelona, puesto que, de persistir la sequía, el área metropolitana de la Ciudad Condal podría sufrir cortes en el suministro a partir de octubre. Soraya Rodríguez mantuvo una reunión en la sede del PSOE con sus homólogos de las federaciones socialistas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. Por la Comunidad Valenciana estuvieron presentes las alicantinas Leire Pajín y Juana Serna, además del valenciano Francesc Signes.

La solución adoptada fue apoyada por los representantes autonómicos reunidos, a excepción de Jesús Miguel Franco, el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, quien comparte, dijo Rodríguez, la emergencia de agua que puede padecer Barcelona, pero que «prefiere pronunciarse sobre la medida una vez que el Gobierno aragonés conozca las conclusiones del informe jurídico que las Cortes aprobaron encargar ayer».

«Derivación de uso»

Rodríguez reiteró que no se trata de un trasvase, sino de una «derivación de uso», es decir, la cesión de derechos de los regantes del Delta para consumo humano a través de la prolongación del minitrasvase ya existente del Ebro a Tarragona mediante la construcción de una tubería que transcurrirá en su mayor parte por superficie plana, la AP-7 y por zona de dominio público.

Esta tubería «quedará cerrada el 1 de junio del 2009, cuando entre en funcionamiento la desalinizadora de El Prat», subrayó Rodríguez. Para la responsable socialista, la solución adoptada es «idéntica» a las emprendidas por el Gobierno en los últimos cuatro años en Almería, Alicante y Murcia. La diputada socialista Juana Serna dio su apoyo a esta obra, puesto que «obedece al principio de coherencia que está aplicando el Gobierno», y dijo que Alicante y Murcia ya obtienen 130 hectómetros del Tajo con este método. Lo de Barcelona es sólo «una copia».

Aunque los socialistas aseguraron que la tubería «quedará sellada» en el 2009, la infraestructura permanecerá: «Si la desmontáramos teniendo una desalinizadora que satisface perfectamente las necesidades hídricas de la ciudad de Barcelona y tuviéramos que hacer frente a una eventual falta de funcionamiento de la misma por distintas causas, parecería bastante ilógico que, después de una inversión en esta infraestructura, no tuviéramos una solución de garantía con la que poder conducir agua a Barcelona», dijo.

Por otra parte, la secretaria federal criticó al PP porque «está utilizando las necesidades de abastecimiento de más de cinco millones de personas para hacer una política partidista y demagoga. El PP debería pronunciarse sobre esta medida puntual adoptada, proponer otra solución si no está de acuerdo y luego hablar de política de agua sobre la que el Gobierno está dispuesto a negociar», señaló Rodríguez, al tiempo que instó al PP «a abandonar la agitación social».

Por su parte, la diputada alicantina Juana Serna reconoció que, «cada vez que aparece el tema del agua, Camps respira, porque no tiene que responder ni trabajar para aplicar la Ley de Dependencia, asegurar una educación digna a nuestros jóvenes o una atención de calidad en los centros sanitarios de la Comunidad, esos que se encuentran abandonados por el PP y el Consell».

A pesar de que «sepamos que el PP vaya a utilizar las necesidades de agua de una ciudad como Barcelona para buscar votos», los socialistas apoyaron el acuerdo firmado entre el Gobierno central y la Generalitat catalana.

«Esta situación demuestra que el PP no está dispuesto a abandonar su guerra del agua, no tiene interés en llega a acuerdos de Estado y sólo busca el rédito político», opinó Serna.